

CAPÍTULO PRIMERO

PRESENTACIÓN. EL TERRITORIO: SU DIVISIÓN Y PLANIFICACIÓN

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Cuando me propuse el desarrollo de una investigación que resultara de utilidad para la configuración de una nueva organización territorial de Cataluña, por sus implicaciones administrativas y territoriales, me pregunté, como es lógico, qué tema concreto debía ser éste y qué alcance debiera tener. Seguí preguntándome si existía alguna justificación para profundizar en algo que a mí me subyugaba profundamente, quizá lo que pudieran representar desde un punto de vista utilitario aquellas materias para la Universidad, considerada en bloque. Pero en todo caso, de existir tal interés, tal utilidad, existiría obviamente en función de algo; y ese algo no podía ser más que la razón suprema de la existencia de la Universidad: la Sociedad y, ¿por qué no?, el territorio o lugar donde ella se asienta. Así, poco a poco, más inequívoca e inexorablemente, me vi conducido al cuadrilátero: Planificación-Economía-Universidad-Territorio, como base dialéctica para el enfoque del tema elegido, que pudiera derivar posteriormente en la elaboración de una tesis doctoral. También me parece más congruente con la labor científica, docente e investigadora de un universitario cualquiera -que, por definición, siempre queda sometida a revisión, crítica posterior e incluso abandono si resultare refutada- ofrecer unas propuestas concretas y novedosas acerca de criterios objetivos de división, organización y gestión territorial, tal como las concibo yo en este momento y, por el talante académico con el que son hechos, desprovistos de cualquier intencionalidad de orden político o partidista.

Me preocupa, y no quiero disimularlo, lograr no solamente una dialéctica válida apoyada en experiencias reales, recientes en el tiempo y próximas en el espacio, sino también establecer una correcta relación entre los dos polos fundamentales y principalísimos del tema que vamos a abordar en la presente tesis: la Geografía y la Economía. Sobre ello nos extenderemos más en el capítulo siguiente.

El concepto de “comarca”, que aglutina un número determinado de municipios, y cuyo manejo será básico a lo largo y ancho de nuestro estudio, sugiere inmediatamente otro concepto de singular relieve y exaltación en nuestros días, y que define un sistema territorial de mayor envergadura: la REGIÓN o COMUNIDAD AUTÓNOMA. Como puede verse, hemos obviado

expresamente y por su artificiosidad específica en el caso catalán, un escalón intermedio entre ambos: la PROVINCIA (importado de Francia en 1833 por el que fuera Ministro de Fomento y de la Gobernación Francisco Javier de Burgos¹).

A nuestro juicio, la REGIÓN podría considerarse como una extensión natural del concepto de COMARCA. En Cataluña este concepto podría equipararse, asimismo, al de "Veguería". Un concepto eminentemente económico de la región pudiera definírnosla como un "área geográfica caracterizada por una estructura particular de sus actividades económicas así como por un marcado grado de homogeneidad socioeconómica".

Ahora bien, esta región económica que es, hoy en día, una realidad buscada y analizada con el decidido propósito de presentar espacial y sociográficamente una zonificación a efectos de planificar el desarrollo, y que hemos visto plasmada, años atrás, en el gran "Atlas Social-Económico de las Regiones de Europa", del Prof. Luis Nevendörfer, editado bajo el patronazgo del Consejo de Europa, olvida, con frecuencia, que los factores determinantes de la región no son solamente de carácter económico. Olvida, además, que amén de la idea de mercado, hay que tener en cuenta estructuras de otro orden bien distinto: jurídicas, culturales, históricas, religiosas, defensivas, topográficas y otras, incluso, que por su difícil cuantificación a efectos numéricos, pudiéramos calificar.

En mi exposición, propugnaré un conjunto de instrumentos de cuya aplicación, mediante el empleo de una metodología rigurosamente objetiva, surgirán delimitaciones territoriales ("comarcas" y/o "regiones") basadas en la hipótesis exclusiva de equilibrio económico-espacial. No se trata, pues, de "comarcas o regiones naturales", en tanto que no vendrán definidas exclusivamente por sus elementos fisiográficos o naturales.

Por las razones ya anteriormente expuestas, y extrapoladas a la idea de "comarca" (que constituye, a su vez, un ámbito territorial primario, racional y operativo, cuya explotación debe reportar grandes éxitos a la política la ordenación del territorio en ciertas Comunidades Autónomas, como Cataluña), no se pretende, en modo alguno, monopolizar el acierto en los diferentes criterios de comarcalización a través de la aplicación de técnicas estadísticas, econométricas y, en definitiva, modelos económicos de instrumentalización más o menos matematizada. Por el contrario, trataremos únicamente de sugerir procedimientos y técnicas² para el logro de una zonificación altamente objetiva y original, que atiende a la ya citada hipótesis de equilibrio económico-espacial,

¹ Político español que nació en Motril (Granada) el 22 de octubre de 1778, habiendo fallecido en 1849.

² Ya el año 1973 tuvimos ocasión de aplicar estas técnicas en concreto a la comarcalización de la "provincia" de Valencia, realizada bajo los auspicios de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la capital del Turia.

y que, en última instancia, puede ser perfeccionada y completada por cualesquiera otras hipótesis de tipo histórico, geográfico, cultural, etc.

2. EL CONCEPTO DE "TERRITORIO"

Viene resultando habitual, desde comienzos del siglo XIX, la diferenciación de tres elementos constitutivos del Estado: el poder soberano, el pueblo o factor humano y *la base física del ejercicio del poder estatal o territorio*. Empero, el concepto de "territorio" significa algo más que lo que sugiere el término literalmente tomado.

El territorio, término cuyo empleo será constante a lo largo de nuestro estudio, y cuya división, organización y gestión racionales son objeto del mismo, constituye la base física de los entes jurídicos e instituciones territoriales (Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Comarca, Municipio, Entidad local menor) y es el espacio en que éstas realizan su actividad. Así pues, debemos considerar el territorio como un elemento esencial de dichos Entes territoriales, hasta el punto de que, sin él, no puede darse la existencia de una organización política significativa.

Desde luego el concepto de "territorio" es más amplio que el de "suelo". Christian (1963) lo define como un área específica de la superficie terrestre, cuyas características abarcan todos los atributos, razonablemente estables o previsiblemente cíclicos, de la biosfera de esta área, considerada verticalmente de arriba a abajo, incluyendo los de la atmósfera, el suelo con sus diferentes horizontes y el material geológico subyacente; también se incluyen la topografía, la hidrología, las poblaciones vegetales y animales, y los resultados de la actividad humana en el pasado y en el presente, en la medida que estos atributos ejercen una influencia significativa sobre los usos presentes y futuros del territorio por el hombre.

3. LA DIVISIÓN PROVINCIAL

3.1. ANTECEDENTES

Casi ningún país del mundo tiene hechas sus divisiones administrativas, ni siquiera trazados sus límites estatales, con arreglo al criterio de la región natural, por lo que la arbitrariedad es la norma común en este terreno. Recordemos el caso de los Estados Unidos de América, o el del continente africano, donde las más de las veces sus fronteras son puramente astronómicas (meridianos y paralelos).

Pues bien, lo mismo podemos decir respecto a las provincias. Lo que sucede es que con más de un siglo y medio de convivencias "provinciales", se ha engendrado una larga serie de vínculos económicos, culturales, administrativos y de relación social que no pueden sustraerse, en modo alguno, al estudio geográfico. Fijémonos, por ejemplo, en las comunicaciones terrestres y aéreas que, en configuración radial, salen con frecuencia de las capitales de provincia, así como su capitalidad político-administrativa (Delegación del Gobierno Central o Autonómico, Diputación provincial, Delegaciones Ministeriales o Administración Periférica del Estado, Delegaciones Territoriales de las diferentes Consejerías autonómicas, ...).

En definitiva, la división administrativa provincial trató de reflejar -con mayor o menor acierto-, en un momento determinado, lo que se consideraba como "región natural", y esta atrevida afirmación queda justificada si se tiene en cuenta que los caracteres que determinan una región natural no son sólo estrictamente geográficos, sino que lo son también históricos y económicos.

La actual provincia española, que se gesta en las Cortes de Cádiz de 1812, es de importación francesa. No deja de ser paradójico el hecho de que, así como se combate encarnizadamente a los ejércitos napoleónicos en diversos campos de batalla de la piel de toro, en el orden intelectual, por el contrario, las ideas francesas, mucho más progresistas, invaden el tejido social español y se adueñan del pensamiento intelectual de la época. Y si como decía aquel judío de Carrión que "no es peor el consejo porque de hebreo venga", tampoco el hecho de que las provincias españolas sean copia de la división departamental francesa nos debe inducir a un menosprecio apriorístico de las mismas. Antes, al contrario, su creación obedeció a la necesidad perentoria de racionalizar el antiguo régimen en el cual, al convergir autoridades señoriales, municipales y reales sin orden ni concierto, con circunscripciones superpuestas e incomunicadas entre sí, ofrecían un espectáculo caótico, de ineficacia e incoherencia absolutas.

En España se llegó a un primer avance de división provincial a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Según ya nos hemos referido con anterioridad, con la subida al poder de los liberales, y después de algunas tentativas infructuosas, el ministro Francisco Javier de Burgos lanzó oficialmente, el 30 de noviembre de 1833, el decreto estableciendo la actual división provincial, atendíéndose también al aspecto económico, de tal modo que cada provincia participase, en lo posible, de la llanura y de la montaña, del terreno fértil y del agrónomicamente pobre, de comarcas ganaderas y de otras esencialmente agrícolas, con la vista puesta en que cada provincia pudiera abastecerse a sí misma y desenvolverse económicamente con sus propios medios (J. TERRERO Y E. HERNÁNDEZ PACHECO, 1934).

Pese a cuanto se ha dicho de aquella división pionera, sobre todo la estereotipada acusación de “artificiosidad”, los mejores tratadistas de Derecho Administrativo coinciden en señalar que las provincias nacieron superpuestas sobre las regiones naturales existentes en España y que supieron respetar las razones de tipo histórico en la medida de lo posible. En cualquier caso, parece que, inspirándose en el departamentalismo francés, se atendió primordialmente al deseo de abolir o atenuar el espíritu particularista de las regiones, fusionándolas en un molde igualitario basado en conveniencias administrativas, prescindiendo, algunas veces, de las condiciones geográficas, filológicas e históricas del país: de ahí su defectuosidad inicial.

Desde luego, en Cataluña ha podido constatarse que dicha división resulta estéril para la fusión de los sentimientos nacionales en una aspiración común, pues no se ha creado el “espíritu provincial” y diversas comarcas se hallan divorciadas con sus capitales o cabeceras provinciales respectivas en su aspecto comercial, comunicaciones, simpatías o relaciones sociales, culturales y recreativas, etc. Se observa que sólo en aquellas nacionalidades o regiones de característica geográfica uniforme, como por ejemplo Galicia, la distribución político-administrativa se acomoda a lo que determina la naturaleza; pero, salvo contadas provincias del interior, lo general es que las provincias españolas pertenezcan a regiones naturales muy diversas y comprendan comarcas harto diferentes en el carácter fisiográfico.

Puede afirmarse, en fin, que dicha división territorial no hizo más que acentuar los desequilibrios económico-espaciales, al aumentar desproporcionadamente el peso específico de la capital provincial frente al de los restantes pueblos y ciudades, centralizando en demasía las comunicaciones y las bases económicas y culturales.

La primera Constitución española ordenó que en cada provincia hubiera una Diputación presidida por el Jefe Superior y con funciones de control y vigilancia de la administración de los pueblos. Posteriormente, la Ley de 1823, al lado de esas facultades de control y fiscalización de los Municipios, les atribuyó competencias propias; en 1845 llegaron a aprobarse hasta tres leyes sobre las Diputaciones que rigieron hasta el año 1863, en que se dicta una nueva Ley que les atribuye auténticas funciones de gestión. En 1882 surge una nueva Ley, fruto del compromiso político que dio lugar a la Constitución de 1876. Por consiguiente, la evolución de la Provincia en el Derecho español, durante el siglo XIX, sufrió el flujo y reflujo de los vaivenes propios de la época.

Es necesario esperar el Estatuto Provincial de 20 de marzo de 1925, para que se dé a la Provincia lo que viene a ser su concepción actual, que se mantiene en las Leyes de 1935 y 1945 y, prácticamente igual, en la última Constitución española de 1978.

3.2. CONCEPTO

Nacidas ya las provincias, éstas continuaron su trayectoria histórica como un valor entendido a lo largo de la sucesivas Constituciones que han presidido la vida político-administrativa española, al menos hasta la Constitución republicana de 1931. En ella, la Provincia atraviesa el peor momento de su historia, hasta el punto que llega a peligrar su propia existencia. Su artículo 8 la concibe como un ente territorial "integrado por municipios mancomunados". Posteriormente, bajo el régimen franquista, tanto la Ley de Régimen Local de 1950 como la Ley Orgánica del Estado de 1967 toman la provincia en el doble carácter de agrupación de municipios (no mancomunados) y división territorial para la Administración del Estado.

En la Constitución de 1978 actualmente vigente desaparece el concepto de la Provincia como división territorial de carácter unitario del Estado Español ya que, en la división del territorio que resulta del reconocimiento de las Comunidades Autónomas que se constituyan, aparecen unas circunscripciones intermedias entre las Provincias y el Estado; en cualquier caso, su artículo 141.1 la sigue definiendo como "una Entidad Local con personalidad jurídica propia determinada por la Agrupación de Municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado". Por otra parte, el propio precepto constitucional admite que puedan constituirse agrupaciones territoriales de municipios distintas a la provincia lo que, si bien para unos pueda suponer una clara alusión a las Comarcas, otros interpretan el texto como referente a las divisiones existentes en los regímenes especiales de las provincias insulares. No obstante, la interpretación más extensiva es la de que las Comunidades Autónomas, bien por razones históricas o bien porque se constituyen con una sola provincia, pueden tener también una división territorial distinta de la provincial; éste sería el caso que se está planteando en Cataluña en los últimos tiempos.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, define la Provincia, en su artículo 31, como "... una Entidad local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines".

3.3. CARACTERES

De la concepción legal de la Provincia pueden extraerse sus principales notas características, a saber:

a) Trátase de una Entidad Local determinada por la agrupación de Municipios, con lo que sigue siendo una Entidad Territorial intermedia entre éstas y el Estado y, en su caso, entre los Municipios y las Comunidades Autónomas.

b) Por otra parte, conforma una realidad distinta de la simple agrupación de Municipios, que, si bien en algunos casos se ha debido a una creación artificial del legislador, basada en razones históricas, lo cierto es que ha adquirido carta de naturaleza. Es más, la propia Constitución de 1978, en su artículo 137, la consagra como Entidad que goza de Autonomía para la gestión de sus propios intereses, y en el artículo 141, la dota de personalidad jurídica propia, cuyo gobierno y administración autónoma atribuye o encomienda a las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

La mencionada Ley 7/1985 recoge, así mismo, el principio de autonomía para la gestión de los respectivos intereses de la Provincia, garantizando la misma a través de su artículo 2, al establecer que "para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas reguladoras de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas, su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa de los ciudadanos".

c) Por último, la Provincia representa una última dimensión, al ser división territorial para el cumplimiento de las Actividades del Estado y de las Comunidades Autónomas, es decir, constituye una división del territorio a efectos de la organización y gestión de los servicios públicos, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.

Desde luego, los dos primeros caracteres son los que configuran a la Provincia como Ente local, hasta el punto de que no hubiera resultado desacertado buscar un término para referirse a ella como Entidad Local y otro bien distinto para aludir a su condición de ámbito de división territorial más o menos racional de la Administración del Estado, así como de las Comunidades Autónomas (FRANQUET, 1990/91).

4. LA DIVISIÓN COMARCAL

4.1. EL CONCEPTO DE "COMARCA"

4.1.1. Concepto

Se designa con el nombre genérico de *comarca* a *una realidad con base geográfica y socioeconómica de carácter natural, formada por una agrupación de municipios*.

Lluís Casassas y Joaquim Clusa definen la comarca como "el espacio dotado de una cierta homogeneidad y organizado alrededor de un núcleo central, donde se dan relaciones que no son de base diaria, pero que crean entre sus habitantes unos vínculos de interdependencia y de conectividad" (CASASSAS, LL. y CLUSA, J., 1981).

El término *comarca* no se halla expresamente recogido en la Constitución española de 1978, pero, en su artículo 141.3, se posibilita su creación al establecer que "se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la Provincia". Por otra parte, el artículo 152 de nuestra Carta Magna, al tratar de los Estatutos de Autonomía, establece que "mediante la agrupación de Municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica". *Como consecuencia de ello, la casi totalidad de los Estatutos de Autonomía, recogen la posibilidad de creación de Comarcas*.

4.1.2. Regulación Legal

El artículo 3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cita expresamente a la comarca como Entidad Local.

El artículo 42 de la misma establece que "las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos, podrán crear en su territorio Comarcas u otras Entidades que agrupen a varios Municipios, cuyas características determinen intereses comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de servicios de dicho ámbito". La creación de las Comarcas corresponde, pues, a las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias. Por lo que, lógicamente, la iniciativa para su creación corresponde a las mismas, si bien, como indica la Ley Reguladora de las Bases mencionada, **tal iniciativa podrá partir de los propios Municipios interesados**. En cualquier caso, bien sea a iniciativa de unas o de otros, debe respetarse la voluntad de los Municipios afectados, si bien no resulta necesario que tal voluntad sea unánime, ya que no podrá crearse la Comarca si se oponen expresamente a ello las dos quintas partes de los Municipios que debieran agruparse, siempre que, en este caso, representen al menos la mitad del censo electoral del territorio correspondiente. A su vez, el artículo 81 de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña especifica que

los municipios agrupados deben ser contiguos. Cuando la Comarca deba agrupar a Municipios de más de una Provincia, será necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales Municipios.

El artículo 2 de la Ley de Organización Comarcal de Cataluña establece los criterios de formación de las comarcas, especificando que los ámbitos territoriales resultantes deben coincidir con los espacios geográficos en que se estructuran las relaciones básicas de la actividad económica y han de agrupar municipios con características sociales, culturales e históricas comunes.

El ámbito territorial de la Comarca, así como la composición y funcionamiento de sus órganos de gobierno, sus competencias y recursos, serán regulados por las Leyes de las Comunidades Autónomas. Los órganos de gobierno de la Comarca, en fin, serán representativos de los Ayuntamientos que agrupen.

Para la determinación de las competencias de las Comarcas, hay que partir de las competencias de los propios Municipios agrupados, con la limitación que fija el punto 4 del artículo 42, el cual establece que la creación de las Comarcas no podrá suponer la pérdida, por los Municipios, de la competencia para prestar los servicios enumerados en el artículo 26 (se refiere a los servicios mínimos u obligatorios), ni privar a los mismos de toda intervención en cada una de las materias enumeradas en el apartado 2 del artículo 25, que fija las competencias municipales con carácter general. Cabe señalar, en fin, que según el artículo 4 de la expresada Ley Reguladora, la atribución de competencias debe ir acompañada del señalamiento de las correspondientes potestades administrativas (FRANQUET, 1990/91).

Veamos, por último, lo que establece al respecto el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es la norma institucional básica que rige en esta Comunidad Autónoma. Define los derechos y deberes de la ciudadanía de Cataluña, las instituciones políticas de la nacionalidad catalana, sus competencias y relaciones con el Estado y la financiación de la Generalitat de Cataluña. Esta ley, también denominada Estatuto de Miravet, fue refrendada por la ciudadanía el 18 de junio de 2006 y sustituye al Estatuto de Sau, que fechaba de 1979. Entró en vigor el 8 de agosto del mismo año. Pues bien, en su artículo 92 establece que:

1. La comarca se configura como ente local con personalidad jurídica propia y está formada por municipios para la gestión de competencias y servicios locales.

2. La creación, modificación y supresión de las comarcas, así como el establecimiento del régimen jurídico de estos entes, se regulan por una ley del Parlamento (catalán).

4.2. LAS COMARCAS EN CATALUÑA

En Cataluña, la división en veguerías, ya instrumentalizada por los condes de Barcelona, perduró hasta el triunfo de las tropas de Felipe V y la consiguiente aprobación, en 1716, del "Decreto de Nueva Planta" por el cual el territorio catalán quedaba estructurado en doce corregimientos. Se imponía, de tal suerte, el modelo territorial castellano, que uniformaba y centralizaba la gestión del territorio.

Llegados a este punto, no puede ser nuestro propósito el ofrecer una relación pormenorizada de los hechos y razones históricas que condujeron a la actual división comarcal de Cataluña, por razones obvias de espacio. Digamos simplemente que el pueblo catalán, basándose en la realidad geográfica e histórica, así como a sus necesidades en el terreno económico y social, fue esbozando una división territorial propia del país: la comarcal, iniciada en los años treinta con la Generalitat republicana, decretada en 1936 (si bien como una simple división administrativa) y reafirmada en la Llei 6/1987, de 4 de abril, sobre "l'organització comarcal de Catalunya". Desde luego, según numerosos y prestigiosos autores, el substrato de la comarca tiene raíces históricas muy profundas.

Ahora bien, un país no puede estar replanteándose continuamente su organización territorial, pero tampoco puede mantenerla inalterable de modo indefinido. Este lapso de setenta años que cumple dicha división del territorio catalán (que por cierto, tomaba el carro de tracción animal como referencia media de transporte) supone un tiempo intensísimo de cambios de las condiciones económicas, infraestructurales, sociales y culturales, principalmente en lo que se refiere al acercamiento de los pueblos y centros urbanos como consecuencia del perfeccionamiento de los medios de comunicación, (ferrocarriles, carreteras, autopistas, aeropuertos, redes de telecomunicación y telemáticas, ...), así como a la creación de nuevos centros urbanos, desaparición de otros existentes, levantamiento de enormes complejos industriales, transformaciones agrícolas y ganaderas, etc. Todos ellos son factores que abonan la conveniencia de la elaboración de un nuevo mapa regional y comarcal en Cataluña y, probablemente, también un mapa municipal revisado. *Por ello, pensamos que partiendo de aquella división pionera, debería tenerse en consideración toda una extensa serie de parámetros y condicionamientos no existentes en aquella época y bien presentes al inicio del siglo XXI, que modifican substancialmente la realidad de entonces, justificando cualquier nuevo intento racional y científico de*

organización territorial. El debate sobre este tema, en consecuencia, debe seguir abierto.

Pues bien, con la aplicación gradual de los tres modelos que se describen en los capítulos siguientes, a saber: el estructural, el de decisión multicriterio y el gravitatorio, y haciendo uso de un conjunto de técnicas más o menos matematizadas para cada uno de ellos, que proporcionan al conjunto del proceso, junto con las hipótesis de partida, un alto nivel de objetividad, podemos obtener, en fin, una representación gráfica del sistema económico-espacial y una división del territorio en comarcas que puede reportar, a todos los niveles, un extenso campo de utilidades. Se trata, a nuestro juicio, de una provechosa aplicación de los modelos económicos a la Planificación Territorial.

Se hace constar, que la referida división territorial de Cataluña, establecida el 13 de febrero de 1933 y modificada el 23 de diciembre de 1936 por la “Ponència de la Conselleria d’Economia de la Generalitat”, delimitaba treinta y ocho comarcas, afectando, además, a cada una de ellas con su correspondiente cabecera de comarca. Posteriormente (*Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* del 16/05/1988, nº: 992), se han creado tres más: l’Alta Ribagorça, el Pla de l’Estany y el Pla d’Urgell. En el año 2000, por encargo del gobierno de la Generalitat y a instancias de todos los grupos políticos del Parlament de Catalunya se constituyó una Comisión de Expertos, presidida por el político y abogado Miquel Roca Junyent, de la cual formaba parte el doctorando, que redactó un cierto *Informe sobre la revisió del model d’organització territorial de Catalunya*, que proponía la creación de seis nuevas comarcas: el Segre Mitjà, l’Alta Segarra, el Baix Llobregat Nord, la Selva Marítima, la Vall de Camprodon y el Moianès.

Estimamos superfluo el señalar que, desde aquella época hasta nuestros días, el “stato-quo” socioeconómico de Cataluña ha cambiado lo suficiente como para justificar, con creces, un nuevo intento de comarcalización del Principado, auspiciado desde las “Conselleries de Política Territorial i Obres Públiques” y/o de “Governació i Administracions Públiques”, basado en la aplicación de modernas técnicas informáticas, estadísticas y de la Investigación Operativa, y que contemple provechosamente el nuevo orden económico, demográfico y cultural. *Y creemos, humildemente, que el procedimiento o conjunto de técnicas que aquí se propugnan bien pudiera ser válido al respecto.*

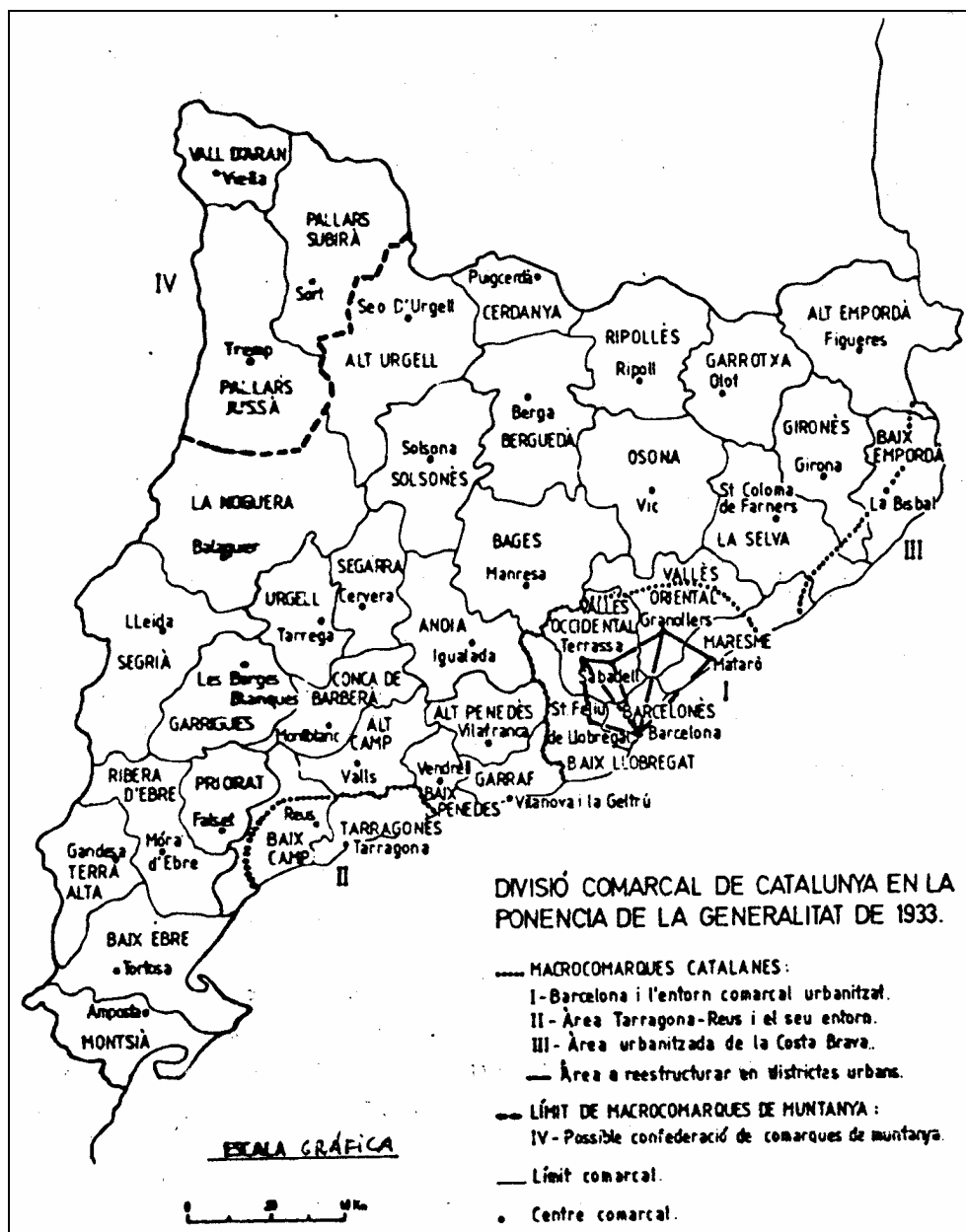


Fig. 1.1. División comarcal de Cataluña en la ponencia de la Generalitat de 1933.



Fig. 1.2. División territorial de Cataluña en 44 comarcas (Propuesta de Pere Bordes).

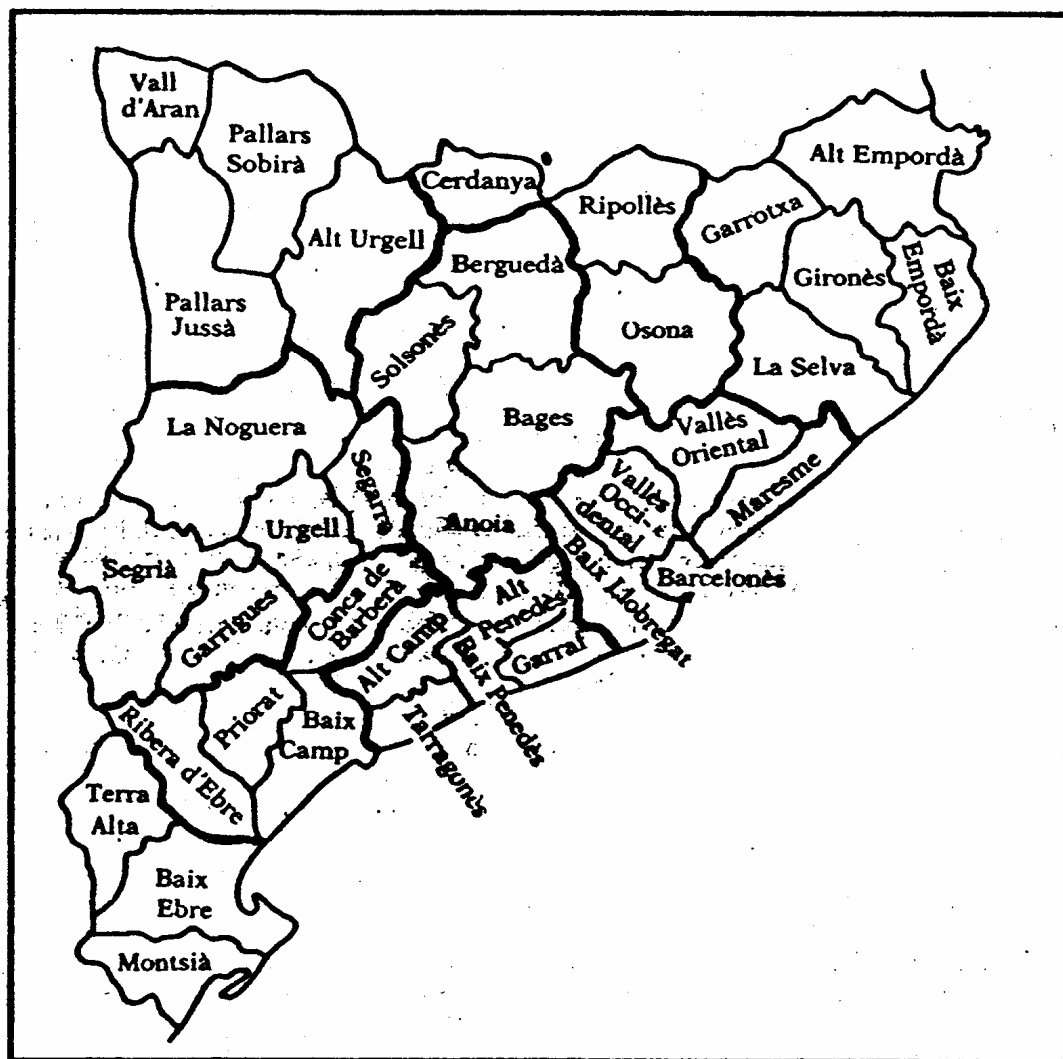


Fig. 1.3. División territorial de Cataluña en regiones y comarcas, según los trabajos de la Ponencia de la Generalitat (1932-1936).

5. RESUMEN

En el presente capítulo, una vez fijados los objetivos y el contexto de la investigación a desarrollar en la presente tesis doctoral, se anuncia la elaboración de un conjunto de instrumentos de cuya aplicación, mediante el empleo de una metodología rigurosamente objetiva, surgirán delimitaciones territoriales ("comarcas" o "regiones") basadas en la hipótesis exclusiva de equilibrio económico-espacial. No se trata, pues, de "comarcas o regiones naturales", en tanto que no vendrán definidas exclusivamente por sus elementos fisiográficos o naturales.

También se analiza el concepto de "territorio" y "suelo" desde sus diferentes acepciones, así como se realiza una breve reseña histórica de las diferentes divisiones geopolíticas y administrativas acaecidas en España,

centrándose en los conceptos de “comarca” y “provincia” así como su regulación legal, con especial referencia a Cataluña.



